

Santiago, diez de julio de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Ángel Videla Landero, en representación del demandante don Sebastián Ormazabal Murray, en autos sobre declaración de relación laboral, despido indirecto, cobro de prestaciones y nulidad del despido, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de las ministras de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, señoras Graciela Gómez Quitral, Carolina Brengi Zunino y ministra suplente señora Paola Díaz Urtubia, porque -a su parecer- dictaron con falta y abuso grave la sentencia de veintiséis de mayo del año en curso, en cuya virtud, revocaron aquella parte que declaró prescrita la acción declarativa de reconocimiento de relación laboral, y, en su lugar, declararon que aquella debe resolverse en definitiva, y, en seguida, la confirmaron en cuanto acogió la excepción de prescripción de la acción de despido indirecto y nulidad del despido.

Reprocha que se infringieron los artículos 3, 4, 7,8 ,9, 10, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 162, 163, 171, 444, 446, 507, 510 y demás normas aplicables del Código del Trabajo, en relación con los artículos 2519, 2523 y 2524 del Código Civil, en relación con los artículos 273 y 274 y 277 del Código de Procedimiento Civil, al declarar la prescripción de las acciones deducidas, porque la medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos interrumpe los plazos de prescripción por aplicación de lo establecido en el artículo 2523 del Código Civil, que señala que basta el simple requerimiento para interrumpirlos , lo que acontece en el caso, porque el despido indirecto se verificó el 14 de diciembre de 2023 y la medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos se dedujo el mismo día, la que tuvo el mérito de interrumpir la prescripción de las acciones de declaración relación laboral, despido indirecto, cobro de prestaciones y nulidad del despido, respecto de todos los demandados quienes son solidariamente responsables del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por su calidad de coempleador o único empleador.

En consecuencia, por aplicación del artículo 2519 del Código Civil y no habiendo mediado renuncia a la solidaridad, la interrupción de la prescripción debido al simple requerimiento entablado contra una de las demandadas Cassigoli, Carreño y Compañía Limitada, extiende sus efectos y perjudica a los demás demandados solidarios, de lo que se colige que las acciones deducidas no están prescritas. Alega que las acciones versan sobre derechos regidos por el



Código del Trabajo, tales como la acción declarativa de relación laboral, despido indirecto y cobro de prestaciones, por lo cual, el término para declarar la prescripción es de dos años y no de seis meses, como lo sostienen erradamente las resoluciones impugnadas y que se interrumpió por la interposición de la medida prejudicial, precisando que la acción de nulidad del despido prescribe en el plazo de seis meses, que se interrumpe con la presentación de la medida prejudicial y, que, por lo demás, el artículo 2523 CC es claro al sostener que interrumpida la prescripción de corto tiempo es sucedida por la de largo tiempo, por lo que de ninguna manera se aplica la de seis meses del artículo 510 del Código del Trabajo.

Por tanto, como se persigue la declaración de relación laboral el plazo de prescripción es de dos años, que solo puede comenzar a correr desde la época en que se puso término, según el artículo 510 del Código del Trabajo, lo que también se aplica respecto del cobro de indemnizaciones y prestaciones que dependen de dicha declaración, por cuanto, no se encuentran prescritas en consideración a la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo, con la sola excepción de la acción de nulidad del despido.

En forma subsidiaria, reprocha que la interrupción de la prescripción de las acciones debido a la medida prejudicial probatoria ha tenido lugar, a lo menos, respecto del demandado Cassigoli, Carreño y Compañía Limitada, por las razones ya expuestas, lo que funda, además, en la petición subsidiaria efectuada en el escrito de demanda.

Solicita se adopten las medidas conducentes a remediar y sancionar tales faltas o abusos, entre ellas, se deje sin efecto la sentencia impugnada dictada por el tribunal de alzada el 26 de mayo de 2025, y, en su lugar, se acoja, en definitiva, la apelación, lo que conlleva dejar sin efecto la resolución dictada por el tribunal a quo el 07 de marzo de 2025, y en su reemplazo, se rechace la excepción de prescripción opuesta y se ordene proseguir con la tramitación regular de la totalidad de las acciones deducida, en la especie de declaración de existencia de relación laboral, despido indirecto, nulidad del despido indirecto y cobro de prestaciones respecto de los demandados.

Segundo: Que, informando las recurridas, estiman no haber incurrido en la falta o abuso grave que se denuncia, atendido que la decisión que se impugnó por vía de apelación tuvo como antecedente que el actor se auto despidió con fecha 14 de diciembre de 2023 y que la demanda que pretendía el reconocimiento de la



existencia de la relación laboral, la declaración de la procedencia de los motivos invocados para tomar esa decisión y de nulidad del despido fue interpuesta el 19 de junio de 2024.

En vista de lo anterior, afirman que revocaron lo dictaminado respecto de la prescripción de la acción destinada al reconocimiento de una relación laboral, por considerar que la decisión se había adoptado al margen de los requisitos que permiten así determinarlo en audiencia preparatoria, ordenando continuar el procedimiento a su respecto; y confirmaron la aludida resolución en cuanto se declaró la extinción de las acciones que pretendían el otorgamiento de las prestaciones derivadas del auto despido justificado y de la nulidad del despido, al haber estimado correcta la decisión impugnada al amparo de las normas aplicables al caso sobre prescripción, considerando la extensión del tiempo que medió entre el auto despido y la interposición de la demanda.

Tercero: Que el arbitrio procesal que ocupa estas reflexiones se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "*Las facultades disciplinarias*" y, sobre el particular, el inciso primero del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales estatuye: "*El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma*".

Cuarto: Que esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, *Los recursos procesales*, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387). También cuando una determinada norma legal se ha



interpretado sin considerar los principios que la informan, en concreto el de protección, cuya manifestación concreta es el “*in dubio pro operario*”.

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice referencia con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia. (Barahona Avendaño, José Miguel, *El recurso de queja. Una Interpretación Funcional*, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

Quinto: Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional, se aprecia lo siguiente:

a.- El 14 de diciembre de 2023, don Sebastián Ignacio Ormazabal Murray solicitó decretar medida prejudicial probatoria consistente en la exhibición de documentos que describe respecto de la empresa Cassigoli y Carreño SpA., medida que fue acogida el 21 de diciembre de 2023, notificada por publicación en el Diario Oficial el 1 de marzo de 2024.

b.- A continuación, el 19 de junio de 2024, interpuso demanda declarativa de relación laboral, despido indirecto, cobro de prestaciones y nulidad del despido en contra de don Carlos Rodrigo Cassigoli López, don Alvar Abdiel Carreño Espinoza, doña Guillermina del Carmen Henríquez Olivares, doña Soledad del Carmen Riquelme Zubelzu y de la empresa Cassigoli y Carreño SpA; sosteniendo que fue contratado el 1 de octubre de 2022 y que puso término a la relación laboral por despido indirecto el 14 de diciembre de 2023, en virtud de la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Solicitó se declare la relación laboral entre las partes, acoger la demanda de despido indirecto, ordenando el pago de las indemnizaciones y recargo legal; el pago de prestaciones laborales, correspondientes a las indemnizaciones compensatorias de feriado legal y proporcional, remuneraciones de los meses de octubre a diciembre, cobro de cotizaciones de seguridad social y la sanción de nulidad del despido.



c.- Al contestar los demandados don Carlos Rodrigo Cassigoli López y doña Soledad del Carmen Riquelme Zubelzu, opusieron las excepciones de caducidad y de prescripción, porque la demanda se presentó el 19 de junio de 2024, transcurriendo más de seis meses de finalizada la relación laboral, además que la presentación de la medida prejudicial solo se notificó respecto de una demandada, sin que involucrara a ninguno de los otros cuatro demandados, por lo que la interrupción, no los afecta, por lo que la demanda se encuentra caduca. Citan el artículo 510 del Código del Trabajo, sosteniendo que también se encuentran prescritas las acciones para demandar el despido indirecto, la nulidad del despido y el cobro de prestaciones laborales.

d.- Por resolución de 7 de marzo de 2025, el tribunal de la instancia desestimó la excepción de caducidad, *“porque la fecha de despido indirecto habría sido el mismo día de la interposición de la demanda prejudicial probatoria, esto es, 14 de diciembre de 2023, puesto que es posible concluir que el demandante efectivamente recurrió a los Tribunales en la oportunidad que la ley establece, sin perjuicio que en fecha posterior hubiere deducido, finalmente, la demanda correspondiente”*.

Respecto de la excepción de prescripción, sostuvo que: *“con el mérito de los antecedentes expuestos, y teniendo en especial consideración lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, encontrándose extinta la relación laboral desde el 14 de diciembre de 2023, y habiéndose notificada la demanda primeramente el 3 de septiembre de 2024 a uno de los demandados, el plazo establecido en el citado artículo ya transcurrió. En efecto, y del mismo modo que se ha sostenido por la doctrina administrativa y judicial, el plazo de prescripción a considerar es distinta a la caducidad; y para el caso en que haya terminado el contrato de trabajo, es aquel establecido en los incisos segundo y tercero del citado artículo 510, es decir, el demandante contaba con un plazo de sólo seis meses contados desde el término de los servicios, y la interrupción de la prescripción ocurre con la notificación de la demanda. Apoya lo anteriormente señalado, la circunstancia que, no obstante, el inicio del procedimiento, la demanda fue impetrada el 19 de junio de 2024, es decir, 6 meses y 1 semana después de terminado los servicios.*

En consecuencia, se acoge la excepción de prescripción impetrada, sin costas, por haber tenido motivo plausible para demandar, respecto de las acciones de reconocimiento de relación laboral respecto de don Carlos Rodrigo



Cassigoli López, don Alvar Abdiel Carreño Espinoza, doña Guillermina del Carmen Henríquez Olivares, doña Soledad del Carmen Riquelme Zubelzu, declaración de despido indirecto justificado y nulidad del despido; sin perjuicio del cobro de las cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas por parte de la sociedad Cassigoli y Carreño SpA, debiendo oficiarse oportunamente las instituciones previsionales correspondientes.

En seguida, consta en registro de audios que la jueza, previo a finalizar la audiencia, expresó que acoge la prescripción respecto de todos los demandados.

e.- Con fecha 26 de mayo de 2025, las recurridas revocaron la resolución, en cuanto había acogido la excepción de prescripción de la acción de declaración de relación laboral y, en su lugar, declararon que deberá ser resuelta en la sentencia definitiva, debiendo continuar el procedimiento respecto de la referida pretensión; y, confirmaron, en lo demás apelado, en cuanto acoge la referida excepción en lo relativo a las demandas de despido indirecto y nulidad del despido.

Para ello tuvieron en consideración en torno a la demanda declarativa de relación laboral que: “Sin perjuicio del debate en torno a la regla que debe aplicarse a la acción que persigue la declaración de la existencia de una relación laboral, esto es, si la contenida en el inciso primero o en el inciso segundo del artículo 510 del Código del Trabajo, lo cierto es que los antecedentes invocados para sostener su extinción son insuficientes para declararla en la instancia a que se refiere el artículo 453 N°1 del Código del Trabajo”. En cuanto a las demás acciones, afirmaron que: “en atención a la data de término de la relación laboral y la fecha de interposición de las demandas de despido indirecto y nulidad del despido, aparece de manera evidente que – a la época del segundo de los hitos indicados, en relación con el primero - han transcurrido los plazos de 6 meses establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 510 del Código del Trabajo, respectivamente”.

Sexto: Que, como se aprecia, el reproche del recurrente a las recurridas se dirige a imputarle una grave falta o abuso al confirmar la resolución que declaró la prescripción de las acciones de despido indirecto y nulidad del despido, efectuando una abusiva e improcedente interpretación de determinadas normas legales.

Séptimo: Que, como consta de la resolución impugnada y de los antecedentes del proceso, la demanda tiene como primera pretensión que se



declare la relación laboral y su continuidad. Tal precisión resulta relevante, porque las recurridas yerran al separar las acciones deducidas, desde que la base de la pretensión se refiere, primero, al esclarecimiento del carácter de la vinculación y solo una vez que resuelva aquello se puede dirimir las restantes pretensiones.

Por consiguiente, la acción de despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones derivada de un vínculo cuya real naturaleza forma parte del conflicto sometido al conocimiento de la judicatura laboral, queda supeditada, en los aspectos sustantivos y adjetivos, incluido el plazo para su interposición, a la acción de declaración de relación laboral, pues no pueden existir en forma independiente de aquella.

Octavo: Que, en consecuencia, atendido lo reflexionado, las juezas recurridas incurrieron en falta o abuso al no considerar que, en la especie, el pronunciamiento sobre la excepción de prescripción de la acción se encuentra supeditado a aquella que tiene por objeto una declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza del vínculo, por lo que procede dejar la decisión sobre la referida excepción para definitiva y continuar con la tramitación de la demanda como en derecho corresponda.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** el recurso de queja deducido contra las integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago que pronunciaron el fallo de veintiséis de mayo del año en curso, que se deja sin efecto, también el de siete de marzo de la presente anualidad, en aquella parte que declaró la prescripción de la acción de despido indirecto y nulidad del despido, excepción que deberá ser resuelta en definitiva, debiendo la judicatura proseguir la tramitación de la demanda deducida según la normativa aplicable.

No se ordena pasar estos antecedentes al Tribunal Pleno, por no existir mérito suficiente para ello.

Redacción a cargo de la ministra señora Andrea Muñoz Sánchez.

Regístrese, comuníquese, archívese y agréguese copia de la presente resolución a los antecedentes tenidos a la vista.

Rol N°20.116-2025.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Jessica González T., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. Santiago, diez de julio de dos mil veinticinco.





En Santiago, a diez de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

